Ciudad de México, 25 de mayo del 2024.

Versión estenográfica de la sesión pública de la Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la cuarta circunscripción plurinominal, realizada el día de hoy.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Inicia la sesión pública convocada para hoy.

Secretaria general de acuerdos, verifique por favor el quórum e informe los asuntos listados para su resolución.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Con su autorización, magistrada presidenta.

Se hace constar que se encuentran presentes la magistrada y los magistrados que integran el pleno de esta Sala Regional, en el entendido de que Luis Enrique Rivero Carrera actúa como magistrado en funciones de conformidad con lo establecido en el acta de designación correspondiente, por lo que hay quórum para sesionar válidamente.

También le informo que serán materia de resolución 12 (doce) juicios de la ciudadanía, 4 (cuatro) juicios de revisión constitucional electoral y 1 (un) recurso de apelación, con las claves de identificación, partes actoras, recurrentes y responsables precisadas en el aviso y su complementario publicados en los estrados de esta sala y en la página de internet de este tribunal.

Es la relación de los asuntos programados, magistrada presidenta, magistrados.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias, secretaria.

Magistrados, someto a su consideración los asuntos listados para esta sesión.

Les pido por favor que si están de acuerdo levanten la mano en votación económica.

Se aprueba.

Mayra Santín Alduncin, por favor presenta los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado Luis Enrique Rivero Carrera.

Secretaria de estudio y cuenta Mayra Selene Santín Alduncin: Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados.

Doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de la ciudadanía 1391 del presente año, promovido contra la determinación emitida por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA que sobreseyó el medio de impugnación intrapartidista al haberse presentado fuera del plazo señalado en el reglamento de dicha comisión.

Una vez justificado el conocimiento del juicio saltando la instancia previa, la consulta propone ineficaces los agravios vinculados con la prevalencia del proceso de insaculación de las candidaturas a las diputaciones locales de representación proporcional del partido respecto del acuerdo de reserva de dichas candidaturas aprobado por la comisión nacional de elecciones.

Lo anterior, pues la ponencia advierte que como correctamente lo determinó la comisión de justicia responsable, el acto intrapartidista que combatió desde un inicio la parte actora y que le causa perjuicio es, en realidad, el mencionado acuerdo de reserva, mismo que no se impugnó en su oportunidad.

En este sentido, si la parte actora sigue descansando su defensa en un supuesto derecho adquirido dentro del proceso de insaculación de candidaturas aduciendo la presunta ilegalidad del acuerdo de reserva, así como la falta de atribuciones de la comisión nacional de elecciones para emitirlo, al no haber impugnado oportunamente dicho acuerdo, su planteamiento resultan ineficaces para alcanzar su pretensión de que se revoque la determinación impugnada.

Por tal motivo se propone confirmar la determinación controvertida.

A continuación doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 1396 de este año, promovido en salto de la instancia a fin de impugnar el acuerdo del Instituto Electoral de la Ciudad de México por el que aprobó el registro de la candidatura postulada por la coalición "Va por la CDMX", la candidatura común "Seguiremos Haciendo Historia en la Ciudad de México", y por el partido Movimiento Ciudadano, respectivamente, a diputaciones locales de mayoría relativa bajo acción afirmativa de personas afromexicanas.

Al respecto, la parte actora hace valer que el acuerdo impugnado contraviene el deber de fundamentación y motivación a cargo del instituto local.

En la consulta se propone fundado, pero inoperante, el agravio relativo a que la responsable concedió a la coalición y candidatura común y a Movimiento Ciudadano una segunda oportunidad para reunir elementos para acreditar la adscripción calificada de las candidaturas, ya que si bien el instituto local omitió citar el precepto legal que justificó su requerimiento, lo cierto es que el mismo encuentra sustento en el código electoral local, aunado a que es una cuestión que por sí sola en modo alguno puede conducir a la invalidez del acuerdo controvertido.

Con base en esos razonamientos se considera que tampoco le asiste la razón al accionante en cuanto refiere que el soporte documental recabado por la asociación

política con motivo del requerimiento en comento, y que posteriormente fue admitido y valorado por la responsable, constituye una actuación contraria a la norma adjetiva local sobre la base de que dichas constancias fueron emitidas con posterioridad a los plazos establecidos para la recepción de solicitudes de registro, ya que a juicio de la ponencia la notificación de ese requerimiento se formuló en cumplimiento a lo ordenado por esta Sala Regional al resolver diverso juicio, en que determinó que las candidaturas que fueron objeto de revisión no cumplieron con el requisito de adscripción calificada y tiene fundamento normativo en el código electoral local, por lo que si los partidos atendieron dicho mandato dentro del plazo fijado para tal efecto, fue ajustado a derecho que el instituto local realizara la valoración respectiva para dilucidar si la documentación que le fue remitida era eficaz o no para acreditar el requisito de adscripción calificada.

Finalmente, la ponencia estima que los registros de las candidaturas, objeto de impugnación, deben ser confirmados, en tanto que la documentación que presentaron los partidos que la postularon es eficaz para acreditar su adscripción calificada, pues en cada caso se puede desprender su adscripción como personas afromexicanas y que han prestado servicios a esa comunidad en el ámbito territorial por el que se postulan, aunado a que la parte actora no aportó medios de prueba alguno que fuera factible para derrotar la presunción que se produce respecto de su adscripción calificada.

Enseguida, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 1407 del año en curso interpuesto por una persona para controvertir la resolución emitida por el Tribunal Electoral del estado de Puebla, que confirmó la determinación de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del Partido Revolucionario Institucional que, a su vez, confirmó la sustitución y registro del 4º (cuarto) lugar de la lista de la candidatura suplente de la diputación por el principio de representación proporcional de la entidad referida.

El actor considera que el tribunal local no abordó el análisis del asunto bajo los principios de exhaustividad y congruencia, y además tampoco valoró que el hecho de que no le fuera notificado de forma personal el acuerdo de sustitución de la suplencia de la candidatura a diputación local dentro del proceso interno, sí vulneró sus derechos porque no conoció que en ese acto fue reemplazado en la candidatura en la que ya se le había designado.

Al respecto, la propuesta considera infundados los agravios porque del contraste entre los argumentos expuestos por el actor en la instancia local y lo analizado por la autoridad responsable, se observa que éste examinó el asunto de manera congruente y exhaustiva, haciéndose cargo de lo expresado por el actor y de las pruebas que se observan del expediente.

Además de ello, en el proyecto se razona que el tribunal local sí ponderó los hechos y contextos del caso y a partir de ello determinó y explicó por qué a pesar de que el acuerdo de sustitución no le fue notificado al actor de manera personal, ello no alteraría que la sustitución fue realizada para que la postulación a la 4ª (cuarta)

diputación de representación proporcional suplente fuera a favor de una acción afirmativa indígena y bajo la atribución contemplada en el artículo 209 del Estatuto del partido político, además de que el tribunal local consideró que el actor en la instancia local no señaló tener ni tampoco razonó por qué tiene un mejor derecho que la persona registrada en su calidad de indígena.

Bajo lo expuesto, se pone de manifiesto que el tribunal local a pesar de estimar que el acuerdo de sustitución debió de notificarse al actor personalmente, sí valoró porque ello no alteraría la sustitución realizada por el partido político. En consecuencia, se propone confirmar la resolución impugnada.

Continúo con la cuenta de forma conjunta con los proyectos de sentencia de los juicios de la ciudadanía 1426 y 1429, ambos de este año, en los que, en cada caso, las personas actoras impugnan la determinación de las vocalías del registro federal de electores en diversas juntas distritales; ello, por declarar improcedentes las solicitudes de expedición de credencial para votar porque no acudieron oportunamente a recoger dicho instrumento antes de la fecha establecida para su resguardo.

En los proyectos se propone confirmar las determinaciones impugnadas porque en ambos casos las personas actoras aportaron los comprobantes de su trámite y conocían a partir de qué fecha estarían disponibles las credenciales, la fecha límite para recogerlas, así como la consecuencia de no realizarla en este plazo, sería su resguardo.

De ahí que el hecho de que no recogieran sus credenciales dentro de los plazos establecidos para ello, justifica que éstas fueran resguardadas por la autoridad electoral y, en consecuencia, que deban confirmarse en cada caso las resoluciones impugnadas.

Doy cuenta con el proyecto de resolución del juicio de revisión constitucional electoral 66 de la presente anualidad, promovido por MORENA a fin de impugnar la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Morelos en la que determinó que el candidato propietario a la presidencia municipal de Puente de Ixtla, Morelos, postulado por el partido político Morelos Progresista cumplió con los requisitos legales y constitucionales para ser registrado para dicho cargo.

La ponencia estima fundado el agravio en el que MORENA aduce que el tribunal local realizó una incorrecta interpretación del contenido del artículo 38, fracción VII, segundo párrafo de la constitución federal, en razón de que -contrario a lo que refirió- no es necesario el dictado de una sentencia firme, sino que basta con el simple incumplimiento de las obligaciones alimentarias para que proceda su inscripción en el registro de personas deudoras.

Lo fundado del agravio radica en que el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 38 de la constitución federal no tiene vínculo alguno con el resto de las fracciones del citado precepto, pues regula y fue creada para situaciones y casos

completamente distintos, de ahí que no resulte necesario la existencia de la una ejecutoria firme para que este supuesto se pueda acreditar, pues únicamente será necesario que el juez o jueza civil o familiar de la causa emita un acuerdo o declaratoria en donde solicite la inscripción de la persona deudora alimentaria, derivado del incumplimiento al juicio que se le está llevando.

Por otra parte, se estima que no se le asiste la razón a MORENA, pues del acervo probatorio existente en autos se desprende que la causa de inelegibilidad de la persona propuesta como candidato había cesado, ello porque si bien el candidato se encontraba inscrito en el listado de deudores morosos alimentarios al momento de la solicitud de registro, tal circunstancia había cesado, derivado de las determinaciones jurídicas emitidas por la autoridad civil.

De igual forma, la ponencia propone estimar infundado el agravio en el cual la parte actora señala que la responsable realizó un incorrecto análisis del tema relativo a la garantía de audiencia y debido proceso, pues tal y como lo sostuvo el tribunal local fue correcto que el instituto local aprobara el registro del candidato al advertir que el consejo municipal no había salvaguardado la garantía de audiencia del candidato, dejándolo sin oportunidad de conocer las hipótesis en las cuales se colocaba y que posiblemente lo llevarían a pedir el registro solicitado, sin contar con la oportunidad de subsanarlo o realizar los actos que estima procedentes.

Asimismo, también es infundado el agravio relativo a que la autoridad responsable llevó a cabo un indebido análisis de la condición de inelegibilidad, toda vez que excedió su competencia llegar a la conclusión de que el candidato a la fecha había cubierto el pago de alimentos.

Ello es así, pues la parte actora parte de la premisa incorrecta de que fue el tribunal local quien determinó que derivado de que el candidato había suscrito un convenio para el cumplimiento de sus obligaciones, los pagos respectivos se encontraban cubiertos.

Sin embargo, ello fue derivado de las constancias que obraban en el expediente mediante las cuales constató que lo determinado por el instituto local fue apegado a derecho.

Por las consideraciones expuestas y al resultar fundado el agravio relativo a la incorrecta interpretación del artículo 38, fracción VII, segundo párrafo la ponencia propone modificar la resolución impugnada en los términos precisados en el apartado correspondiente.

Enseguida doy cuenta del juicio de revisión constitucional electoral 71, así como del juicio de la ciudadanía 1415, ambos del año en curso, en cuya acumulación se propone, en estos juicios se controvierte la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, que confirmó el acuerdo emitido por el instituto electoral y de participación ciudadana de dicho estado, por el que se aprobó el registro de candidaturas de las planillas y listas regidurías de representación proporcional para

la integración de los ayuntamientos en los municipios de la entidad federativa postuladas por MORENA, en específico por lo que hace al cumplimiento del requisito de residencia efectiva para contender como candidato propietario por la presidencia municipal de San Miguel Totolapan.

En el proyecto se propone declarar fundados los agravios de la parte actora en que cuestiona que en la resolución controvertida se realizó una interpretación indebida invocando destacadamente el principio pro persona respecto del requisito de residencia efectiva de cinco años previos al día de la jornada electiva del candidato cuestionado; esto, ya que conforme se desarrolla la consulta con sustento en el marco normativo constitucional, así como legal del estado de Guerrero y siguiendo la línea jurisdiccional que al respecto ha trazado este tribunal electoral, en el caso concreto se advierte que la autoridad responsable trasladó indebidamente la verificación del requisito a partir de una concepción de vecindad y no de residencia efectiva material del candidato cuestionado en el municipio por el que pretende contender.

Además también se propone considerar fundados los agravios en que se cuestiona que el tribunal responsable dejó de apreciar en lo individual e integralmente el valor y el alcance adecuado del material probatorio con que contó para tener por demostrada la residencia efectiva del candidato durante los 5 (cinco) años previos al de la jornada electiva, es decir, desde el 2 (dos) de junio de 2019 (dos mil diecinueve).

En ese sentido, la consulta explora cada una de las pruebas allegadas a los medios de impugnación locales y las contrasta con lo razonado por la autoridad responsable en la sentencia impugnada, de donde se evidencia que los indicios arrojados por el análisis individual y concatenado de dichos medios probatorios, no conduce a tener por acreditado el cumplimiento de la residencia efectiva y material del actor en el municipio de San Miguel Totolapan por el periodo previsto en la normativa aplicable.

En consecuencia, se propone revocar la resolución impugnada para los efectos que se precisan en la consulta.

Finalmente, doy cuenta con el recurso de apelación 35 de este año, interpuesto para controvertir el acuerdo del consejo general del INE por el que aprobó las solicitudes de registro de sustituciones de diversas candidaturas, entre ellas la relativa a la senaduría propietaria por el principio de mayoría relativa en la fórmula uno en Guerrero presentada por Movimiento Ciudadano.

En la propuesta se razona que son infundados los agravios del Partido Revolucionario Institucional por los que aduce que el INE no cumplió con lo ordenado por esta Sala Regional en el recurso de apelación 18 de la anualidad en curso, porque contrario a lo que señala el recurrente este órgano jurisdiccional no ordenó sustitución alguna, sino que dejó al arbitrio de la autoridad responsable el análisis de la presunción de la existencia o no del vínculo con la comunidad

afromexicana de las personas postuladas, a efecto de considerar si era procedente el registro para la acción afirmativa correspondiente.

Así, si derivado de dichos análisis el INE había concluido que la persona postulada como candidata propietaria no podía ser postulada para la acción afirmativa, pero la persona suplente sí, y el partido había solicitado el registro de la misma fórmula pero sin la acción afirmativa, ello no implica el incumplimiento de lo ordenada por la Sala Regional.

Además, la ponencia considera que tampoco le asiste la razón al Partido Revolucionario Institucional cuando argumenta que el INE incumplió sus propias determinaciones, pues conforme a los criterios para registrar candidaturas emitidas por el propio instituto, Movimiento Ciudadano no estaba obligado a postular una candidatura afromexicana en Guerrero, sino con base en la libertad determinativa del propio partido, así como en las reglas y principios en juego, podía postularla en cualquier distrito electoral y en cualquier lugar de las listas, lo que la autoridad responsable razonó que sí se cumplía. De ahí que la ponencia estime infundados sus agravios.

Por lo anterior se propone confirmar en lo que fue materia de impugnación.

Es cuanto, magistrada, magistrados.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias, secretaria.

Magistrados, los proyectos están a su consideración.

Adelante, magistrado Ceballos Daza.

Magistrado José Luis Ceballos Daza: Gracias, magistrada presidenta, magistrado Rivero, secretaria general, secretaria.

Una cuenta muy interesante, con muchos asuntos relevantes de cara a los procesos electorales de nuestra circunscripción.

Yo quiero intervenir primero, de manera muy, muy somera, en los juicios de la ciudadanía 1426 y 29, la verdad que solo para señalar el disenso que tengo con estas propuestas, de cara a precedentes que ya hemos sostenido en esta Sala Regional. Es lo único que señalaría que respecto de ese, para pasar a otro.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias.

¿Alguna intervención en relación con estos 2 (dos) asuntos?

Bueno, de mi parte también sumarme al disenso que está manifestando el magistrado Ceballos Daza en términos de lo que ya hemos discutido en semanas

previas, que para mí los 3 (tres) avisos que se tendrían que dar en términos de la LGIPE implicarían en este caso que las credenciales de la parte actora no deberían quedar; bueno, deberán quedar en resguardo, pero sí tienen el derecho a que se les proteja su derecho a votar el próximo 2 (dos) de junio.

Entonces, a pesar de que la credencial se queda en resguardo, a mi consideración deberíamos de expedirles puntos resolutiveos para que puedan acudir a la jornada.

No sé si habría. Adelante.

Magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera: Okey. Gracias, buenas tardes a todos y a todas.

Sí, estos son unos asuntos que ya hemos discutido varias veces, de los 3 (tres) avisos, que la postura de la ponencia es que eso es para cancelación y destrucción; entiendo que la postura mayoritaria es un requisito para el resguardo, en este caso no es así, pero justo por la posición que he sostenido en esto mantendré la propuesta en cada caso en esos términos.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias.

¿Alguna otra intervención? ¿De estos?

Nada más para precisar algo, porque comenté hace ratito que a mi consideración sí se debería de quedar en resguardo nada más expidiendo puntos resolutiveos para explicar por qué. Porque la última vez que tuvimos esta discusión, sí se ordenó la entrega de la credencial a las 2 (dos) partes actoras que venían.

La razón por la cual hace un par de semanas ordenamos eso fue porque esos juicios los resolvimos antes del 20 (veinte) de mayo, y justamente el 20 (veinte) de mayo fue la última fecha que en términos del acuerdo que aprobó el INE, era la fecha para aprobar la última adenda a la lista nominal. Como en este caso, incluso, pues ya sabemos toda la paquetería ya está totalmente distribuida, ya no sería factible agregar los nombres de estas personas a la lista nominal y por eso sería la diferencia y en este caso la expedición de puntos resolutiveos para que puedan votar; mientras que la semana anterior, que todavía era posible incluirles en la lista, el resultado fue la entrega de la credencial.

Adelante.

Magistrado en Funciones Luis Enrique Rivero Carrera: Sí. Digo no pensé que iba a salir este tema, pero justo el punto es los 3 (tres) avisos era precondition de resguardo. Lo que entiendo de la propuesta o contrapropuesta, más bien, sería no procedía el resguardo, pero ya no podemos porque el tiempo no nos da, para hacerlo como muy práctico, y entonces hay que dar puntos.

Aquí sí, entonces tendría que hacer una especificación y porque la propuesta en que además de la consecuencia del resguardo, es que también el derecho a votar, en este caso, sigue la misma consecuencia. Tiene que ver con el artículo 85, si no me equivoco, sí 85, que es el que ordena de nuestra ley las posibilidades de dar puntos resolutiveos y esto nos remite, precisamente en tiempos, material, etcétera, lo que más o menos decía la magistrada, nos remite el artículo 80, que son en los 3 (tres) casos que se pueden dar puntos resolutiveos.

El primero creo que sería el aplicable, dice *“habiendo cumplido con los requisitos y trámites correspondientes no hubiera tenido oportunamente el documento”*, es decir, la credencial.

Los incisos b) y c) son cuando teniendo el documento no están en lista nominal, ese creo que no sería el sustento; digo, me imagino, pues, que no sería el sustento de esta contrapropuesta, nada más que justo como les leí, cumpliendo los trámites y requisitos, y una parte del trámite y requisito que se le dijo en el comprobante era recoger y por eso creo que tampoco serían factibles los puntos resolutiveos.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias.

¿Alguna otra intervención?

No en relación con éste, pero anunció usted...

Magistrado José Luis Ceballos Daza: Exacto.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Adelante.

¿En relación con cuál?

Magistrado José Luis Ceballos Daza: Sería con el juicio de revisión constitucional 71 y acumulado.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Es el penúltimo.

¿Alguna intervención previa?

Adelante, magistrado.

Magistrado José Luis Ceballos Daza: Continuando con mis posicionamientos y con relación a este juicio de revisión constitucional 71 del 2024, me parece un asunto de suma relevancia; yo quiero manifestar respetuosamente que disiento de la propuesta, en particular difiero del sentido y de la decisión que se está tomando.

En efecto, en el presente asunto cobra especial relevancia lo dispuesto por el artículo 173 de la ley electoral, que señala: *“para ser presidente municipal, síndico o regidor de un ayuntamiento se requiere cumplir con los requisitos previstos en el*

artículo 46 de esta constitución, ser originario del municipio que corresponda o con una residencia efectiva no menor de 5 (cinco) años inmediatamente anteriores a la elección”.

Sin duda alguna el concepto de residencia efectiva y los conceptos de vecindad han sido de un desarrollo importante en la lógica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Traigo a cuentas el recurso de reconsideración 208 del 2024 en donde se ha analizado cuáles son los alcances y la interpretación que debe darse al carácter de oriundo y también a la residencia efectiva.

La definición que nos ha aportado Sala Superior es una definición amplia, una definición compleja respecto de este concepto. Y ha llegado a manifestar la Sala Superior lo siguiente en este recurso de reconsideración 208 del 2024: *“En ese contexto al tratarse de conceptos indeterminados originario que tiene relación directa con un requisito de elegibilidad necesario para el ejercicio del derecho político-electoral a ser votado, es preciso recalcar que esta Sala Superior ha considerado que las restricciones al sufragio pasivo deben interpretarse de forma limitativa y no es posible extenderla a otros casos por analogía, mayoría de razón o mediante la utilización de algún otro método de interpretación como el sistemático funcional para justificar la aplicación de restricciones a otros supuestos”.*

Me parece que la línea jurisprudencial que ha trazado Sala Superior es acorde con lo que nos viene exponiendo el Tribunal Electoral de Estado de Guerrero. Yo coincido plenamente con su interpretación y por eso disiento respetuosamente de lo manifestado en el proyecto.

Yo, en particular, sí encuentro que el concepto de residencia efectiva establecido en el mencionado artículo 173 sí puede aceptar una interpretación integradora a partir de los artículos 20 y 23 de la ley orgánica municipal, que señalan lo siguiente:

El artículo 20 dice: *“Se reunirá el requisito de residencia efectiva con fines electorales –hace esa especificación– en los términos del artículo 17 de la Constitución Política del Estado de Guerrero cuando se tengan por lo menos cinco años de vivir de manera permanente, continúa y pública en un municipio, si más ausencias que las transitorias”.*

A partir de este precepto podemos entender que este concepto concibe las posibilidades de ausencias transitorias.

Y luego el artículo 23 señala: *“La vecindad de un municipio no se pierde cuando el vecino se traslade a residir a otro lugar, en virtud de comisión de servicio público de la Federación o del estado, o bien, con motivo de estudios, comisiones científicas, artísticas o por razones de salud, siempre que no sean permanentes”.*

En este sentido, yo creo que la interpretación que está desarrollando el Tribunal Electoral de Guerrero, cabe decir que señala que la realiza en una lógica pro persona, a mí me parece adecuada.

Creo que con los elementos aportados en las constancias es válido considerar que se ha satisfecho plenamente la residencia efectiva.

El concebir que para acreditarla una persona no pueda trasladarse a cumplir algunos otros encargos, algunas otras actuaciones, me parece que de algún modo puede considerarse una interpretación restrictiva, y es hacia donde nos está invitando el criterio de la Sala Superior, al entender que esta residencia efectiva tienen que tener una amplitud de interpretación. Una interpretación si lo queremos ver así, bajo el principio pro persona o que de algún modo no se convierta en un obstáculo o una posición restrictiva de cara al derecho político electoral vulnerado.

Esas son las razones por las que yo difiero de la propuesta que se nos está realizando y por lo que emitiría un voto en contra.

Es cuanto.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias, magistrado Ceballos Daza.

¿Alguna otra intervención?

Magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera: Gracias.

Mantengo la propuesta en sus términos. Explico un poco, entiendo lo que decía el magistrado Ceballos a partir del REC-208/2024, que incluso no estoy seguro si este es el que, en la misma propuesta se cita, respecto al tipo de interpretación de los requisitos de vecindad, oriendad, etcétera.

Difiero de la propuesta, digo difiero de la posición, perdón, no de la propuesta. La propuesta es mía. En el sentido de qué interpretaciones le da el tribunal local, y por qué no debe de ser así.

Me explico un poco. Es una cuestión de residencia efectiva. Hace ratito nos ayudó ahorita el magistrado Ceballos a leer el artículo que habla de la residencia efectiva, uno de ellos y el tribunal local en esta interpretación aparentemente extensiva, lo cambia conceptualmente a vecindad. Si uno los lee así a primera vista parece que sí son coincidentes, pero no. Justo en su libertad configurativa en la entidad determinaron hacer una distinción muy clara entre dos conceptos residencia efectiva e incluso hasta, por eso dice: "*con fines electorales a vecindad*", que son 2 (dos) cualidades que se pueden tener a los habitantes del lugar, pero 1 (uno) enfocado a fines electorales.

El 20 efectivamente dice *“se reunirá el requisito de residencia efectiva con fines electorales, en términos del artículo 17 de la Constitución Política del estado de Guerrero, cuando se tenga por lo menos cinco años viviendo de manera permanente, continúa, pública en el municipio sin más ausencia de las transitorias”*.

Y entonces justo lo que hace el tribunal, dice *“ah, pues las transitorias sí me voy a la vecindad”*, creo que aquí es un yerro de interpretación del tribunal Local, porque si siguiéramos en el artículo 48, que son los requisitos para ser presidente o presidenta municipal, síndica o síndico o regidor o regidora, dice *“fracción II. La primera es ser originario del municipio; segunda, tener una residencia efectiva no menor de cinco años de manera permanente, continúa y pública en el municipio, sin más ausencias que las transitorias”*.

Y aquí me parece que es muy claro llenar de contenido lo transitorio, y siempre que no sean mayores de 30 (treinta) días, es decir, lo que está, es -me parece- la Legislación muy claramente distinguiendo, 2 (dos) tipos de cualidades, la cualidad de residencia efectiva para efectos electorales y la cualidad de vecino para efectos civiles, administrativos, de otro tipo.

Y entonces entran estas ausencias transitorias en que sean menores de 30 (treinta) días, ¿no?, a diferencia de la vecindad, que pueden ser más grandes, menos grandes, no importa qué tanto, dependiendo el que se ejerza en otro cargo.

Aquí se destaca en la propuesta, primero, que en los 2 (dos) municipios donde se acredita que estuvo prestando servicios están más o menos a 2 (dos) horas de distancia, o sea, no es algo que voy y vengo, que tuvo un cargo permanente en este periodo, y justo por eso conforme a los agravios es el análisis individualizado de las pruebas y aquí si nosotros lo que tenemos que analizar es una línea de tiempo, bueno, lo tenía que hacer el tribunal local y ahora nosotros, por esto también individualizado; si son 5 (cinco) años, serían aquello que acredite a la fecha de la elección, 2 (dos) de junio de 2024 (dos mil veinticuatro), 5 (cinco) años para atrás que haya permanecido en el municipio de manera permanente, como lo dice el artículo.

Si bien creo que es muy fácil acreditar lo último porque presenta una constancia, todo se relaciona entre 2023 (dos mil veintitrés) y 2024 (dos mil veinticuatro). De 2023 (dos mil veintitrés) a 2019 (dos mil diecinueve) que es lo que completaría la línea del tiempo de los 5 (cinco) años de residencia permanente, justo aportaron pruebas que destruyen la presunción de permanencia, trabajó en una asociación ganadera, insisto, más de 6 (seis) horas de distancia; tenía creo que un par, incluso, de base de maestro en una escuela y dice el lugar de trabajo adscrito específicamente, y así hay más.

Es decir, entre el 19 (diecinueve) y 23 (veintitrés) hay constancias que acreditan que no fue transitorio menos de 30 (treinta) días, sino salió y estaba en otro lugar. Y en aquellas muy relevante, en 2023 (dos mil veintitrés) él solicita el cambio de domicilio para regresarse al municipio, entonces por lo menos hay una presunción que estaba

fuera del municipio en el cambio de domicilio y todas las pruebas que aporta al revés para tratar de demostrar su residencia permanente en este espacio de tiempo, pues ninguna corresponde al espacio de tiempo, sino excepto, insisto, de 23 (veintitrés) a 24 (veinticuatro) y todas las demás son de 2012 (dos mil doce), 2013 (dos mil trece), 2015 (dos mil quince), y creo que eso no acredita los 5 (cinco) años, que es el tema de análisis que se tiene que hacer aquí, ¿no?

Entonces, yo por eso sostengo en sus términos tal cual la propuesta.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias.

¿Alguna otra intervención?

Magistrado José Luis Ceballos Daza: Sí.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Adelante.

Magistrado José Luis Ceballos Daza: Gracias, magistrada presidenta.

En la primera intervención quise dedicarla al ámbito normativo, que sin duda alguna veo que tenemos disenso, tanto en la interpretación del 173 como en la integración o no de la normatividad de la ley orgánica municipal, artículos 20 y 23.

Pero ahora que toca el tema el magistrado Rivero, pues yo considero que con los elementos que se aportan sí se cumplen también desde una lógica valorativa aprobatoria los requisitos para satisfacer esa residencia efectiva.

Son múltiples los elementos documentales que ofrece la parte actora, pero bueno, para mí cobra especial relevancia lo que se denomina constancia de radicación, en donde el Secretario General del Ayuntamiento señala con claridad que tiene su domicilio ubicado en la calle sin nombre, en San Miguel Totolapan y que vive ahí desde hace más de 30 (treinta) años, por lo que le otorga la constancia correspondiente.

Y a este documento se agregan diversas constancias, no voy a enumerarlas todas, acta de examen profesional, recibo de la compañía federal de electricidad, constancia de antecedentes no penales, constancia de, un oficio de comisión temporal a Alvarado Nava de 28 (veintiocho) de septiembre de 2023 (dos mil veintitrés), 2 (dos) constancias expedidas por la Dirección de la Escuela General Vicente Guerrero, ubicada en el barrio de Santiago de San Miguel Totolapan.

Y entiendo que para la postura del magistrado Rivero esta presunción de residencia efectiva se ve desvanecida con los elementos que nos menciona el magistrado, que es participar como maestro, en una en una municipalidad distinta y ser parte de una asociación ganadera.

Creo que enlazado con lo que señalé en la primera intervención, creo que la valoración probatoria que se realiza de la residencia efectiva tiene que entender que este elemento puede analizarse de manera global e integral, y que en todo caso los elementos deben derrotar el valor protagónico que ocupa esta constancia de certificación de su residencia.

Creo que -insisto- este es el criterio que nos ha arrojado la Sala Superior en varios precedentes, pero fundamentalmente en el que mencionaba y en el que nos invita a que, además de todo, no evaluemos esta residencia efectiva en un modo restrictivo y para no evaluarla en un modo restrictivo, creo que tenemos que tener ese cuidado de no ir haciendo una devaluación individual de cada uno de los documentos, sino revisar integralmente todos ellos y a partir de eso tomar una decisión integral.

Sin duda, este otro segundo segmento de la intervención, pues está dirigido al ámbito valorativo, pero a mí son los 2 (dos) componentes los que me convencen; 1 (uno) desde el ámbito normativo que ya expliqué en la primera intervención, y 1 (una) lógica valorativa que con un enfoque pro persona o sobre todo con una interpretación no restrictiva me lleva a considerar que se ha colmado plenamente esa exigencia.

Es cuanto.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias.

Magistrado, ¿alguna otra intervención?

Adelante.

Magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera: Okey.

Vamos a hacer aquí unas puntualizaciones.

Respecto a la certificación municipal, por supuesto que se analiza y se estudia la propuesta, pero hay que verlo a través de lo que nos dice la jurisprudencia 3/2002 y lo que nos dice es: certificaciones municipales de domicilio, de residencia o vecindad, su valor probatorio depende de los elementos en que se apoye.

No basta que la certificación municipal diga "*lo reconozco que tiene 3000 (tres mil) años*", o sea, 30 (treinta), 5 (cinco), 10 (diez), no importa, si no es con qué documento se apoyan y justo de su análisis se desprende que no trae ningún soporte conforme a la jurisprudencia y al revés, por eso yo les decía en la línea del tiempo lo único que se logra acreditar es de 2023 (dos mil veintintés) a 24 (veinticuatro) y al revés; digo, cité lo de la escuela, cité lo de la asociación ganadera y hay más, pero son los más emblemáticos.

Hay bastantes elementos que en otro municipio estuvo haciendo de manera efectiva su residencia, un municipio que queda a más de 6 (seis) horas de distancia y por eso en su valoración individual o conjunta no se logra acreditar esta residencia permanente e insisto, por eso sostengo la propuesta en sus términos.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: ¿Alguna otra intervención?

Bueno, yo rápidamente para posicionarme al respecto, votaré a favor de la propuesta, a la vez que coincido tanto con la valoración que se hace de las normas aplicables al caso, específicamente el artículo 43 de la ley orgánica municipal, como la valoración de las pruebas y, sobre todo, este último que acaba de mencionar el magistrado Rivero Carrera en relación con esta certificación que no da sustento, que no da plena certeza a la luz de la jurisprudencia en relación a que esta persona vivió realmente aquí durante los últimos 5 (cinco) años.

Además, ahora que estaba revisando este proyecto me llamó la atención que en los ya más de 8 (ocho) años que llevo aquí en la sala creo que el 90% (noventa por ciento) por lo menos de todos los asuntos que hemos visto relacionados con este tema de elegibilidad por domicilio han sido del estado de Guerrero, no sé si es tal vez porque son 5 (cinco) años y es mucho.

Pero sí es algo que me ha llamado la atención y el proyecto que nos presenta el magistrado Rivero Carrera es consistente con la manera en la que he votado desde que llegué a la sala. Es por esas razones por las que yo votaría a favor del proyecto.

No sé si hay alguna otra intervención. Con algún otro de los proyectos, creo que ya solo queda el RAP.

Al no haber más intervenciones, secretaria, por favor toma la votación.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Sí, magistrada.

Magistrado José Luis Ceballos Daza.

Magistrado José Luis Ceballos Daza: En contra de los juicios ciudadanos 1426 y 1429 del 2024, en términos de los precedentes que he votado.

Por otro lado, en contra del juicio de revisión 71 de 2024 y su acumulado en términos de mi intervención.

Y por otro lado, anunciaría la emisión de un voto concurrente solamente en el juicio de revisión constitucional 66 del 2024, con el cual votaría a favor, así como los restantes proyectos de la cuenta.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Gracias.

Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera.

Magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera: Son las propuestas de la ponencia y vista la probable votación del juicio de la ciudadanía 1426 y 1429, formularía un voto particular en cada caso contra el engrose, de ser el caso.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Gracias.

Magistrada María Silva Rojas.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: A favor de todos los proyectos, con excepción de los juicios de la ciudadanía 1426 y 1429, en términos de mi intervención.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Gracias, magistrada presidenta.

Le informo la votación, los juicios de la ciudadanía 1426 y 1429, ambos de este año, han sido rechazados por mayoría de votos, con los votos en contra del magistrado José Luis Ceballos Daza y de usted, presidenta, respecto de lo cual el magistrado Rivero manifestó la emisión de un voto particular en caso de los engroses.

Por lo que hace al juicio de revisión constitucional electoral 71 y el juicio de la ciudadanía 1415, ambos de este año, cuya acumulación se propone, ha sido aprobado por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado José Luis Ceballos Daza, en términos de su intervención.

Los demás asuntos de la cuenta fueron aprobados por unanimidad de votos, precisando que en el juicio de revisión constitucional 66 de este año el magistrado José Luis Ceballos Daza también anuncia la emisión de un voto concurrente.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias, secretaria.

Vista la votación, en los proyectos de los juicios de la ciudadanía 1426 y 1429 de este año y considerando las manifestaciones realizadas por la mayoría, se formularán los engroses respectivos conforme al turno interno.

En consecuencia, en el juicio de la ciudadanía 1391 y en el recurso de apelación 35, ambos de este año, en cada caso resolvemos:

Único.- Confirmar en lo que fue materia de impugnación la determinación controvertida.

En los juicios de la ciudadanía 1396 y 407, ambos de este año, en cada caso resolvemos:

Único.- Confirmar el acto impugnado.

En los juicios de la ciudadanía 1426 y 1429, ambos de este año, en cada caso resolvemos:

Primero.- Expedir copia certificada de los puntos resolutiveos de la sentencia para que la parte actora pueda votar en las elecciones federal y local del próximo 2 de junio.

Segundo.- Vincular a quien ocupe la presidencia y la primera secretaría de la mesa directiva de la casilla respectiva, para que con la copia certificada de la sentencia y una identificación de la parte actora, primero, le permita votar agregando su nombre en el cuadrillo de la lista nominal.

Segundo.- Asiente esa circunstancia en la hoja de incidentes respectiva. Y,

Tercero.- Retenga la copia certificada de los puntos resolutiveos anexando la bolsa en que se guarde la referida Lista Nominal.

En el juicio de revisión constitucional electoral 66 de este año, resolvemos:

Único.- Modificar la sentencia impugnada.

En el juicio de revisión constitucional electoral 71 y el juicio de la ciudadanía 1415, ambos de este año, resolvemos:

Primero.- Acumular los juicios de referencia. Por lo tanto, debe agregarse copia certificada de la sentencia al juicio acumulado.

Segundo.- Revocar la sentencia impugnada para los efectos que se precisan en la resolución.

Denny Martínez Ramírez, por favor, presenta los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado José Luis Ceballos Daza.

Secretaria de estudio y cuenta Denny Martínez Ramírez: Con su autorización, magistrada, magistrados.

Inicio dando cuenta con el juicio de la ciudadanía 1379 de la presente anualidad, promovido por una ciudadana que fue registrada como candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, postulada por MORENA, a fin de controvertir la sentencia por la que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, entre otras cuestiones, confirmó el acuerdo del instituto estatal electoral de dicha entidad federativa, que aprobó la solicitud de registro de la candidatura de un ciudadano postulado por Movimiento Ciudadano al señalado cargo.

Al respecto, la propuesta determina declarar fundado el agravio por el que el actor aduce que el tribunal local dejó de analizar adecuadamente las pruebas que ofreció ante dicha instancia, puesto que de su estudio es dable concluir que la persona cuestionada participó simultáneamente en los procesos internos de selección de las candidaturas de MORENA y de Movimiento Ciudadano, aspecto que actualizó la prohibición contenida en el artículo 215, fracción IV, de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del estado de Guerrero.

Lo anterior, ya que el ciudadano, cuyo registro de candidatura se cuestionó, participó en el proceso interno de selección de candidaturas de MORENA y previo a que éste terminara, participó en el proceso interno de Movimiento Ciudadano, esto sin que realizara actos al interior de MORENA para renunciar a su participación inicial, de ahí que se actualizara la simultaneidad de participación en 2 (dos) procesos internos.

En ese tenor, ante lo fundado de los agravios, el proyecto propone revocar la sentencia controvertida, así como el registro de la candidatura cuestionada para los efectos precisados en el proyecto.

En segundo término, doy cuenta con el proyecto de sentencia del juicio de la ciudadanía 1401 y su acumulado 1405 de este año, mediante los cuales diversas personas ciudadanas acuden a controvertir la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del estado de Guerrero, que confirmó el acuerdo del instituto local en el que aprobó de manera supletoria el registro de las candidaturas de las planillas sin mediar coalición y las listas de regidurías de representación proporcional para la integración de los ayuntamientos de los municipios del estado de Guerrero postulados por MORENA.

En el proyecto se consideran infundados los agravios dado lo siguiente. En principio se explica que fue correcto lo determinado por el tribunal local, ya que en efecto la parte actora al controvertir el referido acuerdo del instituto local no lo realizó por vicios propios, sino que sus argumentos se enderezaron a controvertir el proceso interno de candidaturas, por lo que la parte actora estuvo en aptitud de hacer valer de forma previa las actas partidistas y no hasta el momento de la emisión del referido acuerdo.

Así, en la propuesta se considera que no fue oportuno esperar el acuerdo de registro para impugnar los actos partidistas, máxime que existen indicios de que la parte actora los conoció de forma previa a la emisión del acuerdo.

De ahí que la parte actora estuvo en aptitud de presentar el medio de impugnación a que hace referencia la base 16ª (decimosexta) y 18ª (decimooctava) de la convocatoria que precisa que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de MORENA es el órgano encargado de dirimir los conflictos y que ésta se puede controvertir a través del procedimiento sancionador electoral.

Por lo expuesto se propone confirmar la sentencia impugnada.

Enseguida, doy cuenta con el proyecto de sentencia de los juicios de la ciudadanía 1418 y 1430 de este año, cuya acumulación se propone, promovidos para controvertir la determinación de la Dirección Ejecutiva del Registro Federal Electoral del Instituto Nacional Electoral de no entregar al promovente su credencial para votar.

En la propuesta se razona que la autoridad responsable omitió realizar de manera integral el proceso de orientación previsto en el artículo 136 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el cual establece que si las personas interesadas no acuden a recoger sus credenciales dentro de los plazos previstos se les debe dar hasta tres avisos para que procedan a recogerla, pues de lo contrario podrían tomarse medidas, como su resguardo o destrucción.

En ese sentido, en el proyecto de cuenta se destaca que si bien dichas omisiones no pueden generarle perjuicio a la persona promovente, lo cierto es que la fecha de corte de las listas nominales adicionales producto de resoluciones de este tribunal electoral fue el 9 (nueve) de mayo y la entrega de dichas listas se llevó a cabo el 20 (veinte) de mayo pasado, por lo que la entrega de su credencial ya no podría garantizarle el ejercicio de sus derechos político-electorales para las elecciones que se celebrarán el próximo 2 (dos) de junio.

Por lo anterior y con el fin de garantizar el ejercicio del derecho al voto de la parte promovente, se ordena expedir copia certificada de los puntos resolutivos para que la parte actora pueda votar en la jornada electoral, conforme a los términos precisados en la sentencia.

Finalmente, se propone sobreseer el 2º (segundo) de los juicios mencionados al haber precluido el derecho de acción.

Por último, doy cuenta con el juicio de la ciudadanía 1425 de la presente anualidad, promovido por una ciudadana que fue registrada como candidata a la Presidencia Municipal del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, postulada por MORENA, a fin de controvertir la sentencia por la que el tribunal electoral de dicha entidad, entre otras cuestiones, confirmó el acuerdo del instituto estatal electoral de esa entidad federativa que aprobó la solicitud de registro de la candidatura de un ciudadano postulado por la coalición parcial integrada por los partidos Acción Nacional, Revolucionario Institucional y de la Revolución Democrática al señalado cargo.

Al respecto, la propuesta determina declarar fundado el agravio por el que la actora aduce que el tribunal local dejó de analizar adecuadamente las pruebas que ofreció ante dicha instancia, puesto que de su estudio es dable concluir que la persona cuestionada participó simultáneamente en los procesos internos de selección de las candidaturas de MORENA y PRD.

Aspecto que actualizó la prohibición contenida en el artículo 215, fracción IV de la Ley número 483 de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Guerrero.

Lo anterior, ya que el ciudadano cuyo registro de candidatura se cuestionó, participó en el proceso interno de selección de candidaturas de MORENA y previo a que este terminara, participó en el proceso interno del PRD. Esto sin que se realizaran actos al interior de MORENA para renunciar a su participación inicial. De ahí que se actualizara la simultaneidad de participación en 2 (dos) procesos internos.

En ese tenor, ante lo fundado de los agravios, el proyecto propone revocar la sentencia controvertida, así como el registro de la candidatura cuestionada para los efectos precisados en el proyecto.

Es la cuenta.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias, secretaria.

Magistrados, los proyectos están a su consideración.

Magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera: Muy rápido. Sólo respecto al 1418 y 1430.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Adelante.

Magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera: Es de los asuntos de 3 (tres) avisos. Entonces en este yo no iría a favor. Nada más.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias.

¿Alguna otra intervención?

Al no haber más intervenciones, secretaria, por favor, toma la votación.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Sí, magistrada.

Magistrado José Luis Ceballos Daza.

Magistrado José Luis Ceballos Daza: Son propuestas de la ponencia.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera.

Magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera: A favor de todos los proyectos de la cuenta, con excepción del juicio de la ciudadanía 1418 y su acumulado.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Gracias.

Magistrada María Silva Rojas.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: A favor de todos los proyectos.

Gracias.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Magistrada presidenta, le informo que el proyecto de resolución del juicio de la ciudadanía 1418 y su acumulado 1430, ambos de este año, cuya acumulación se propone, han sido aprobados por mayoría de votos, con el voto en contra del magistrado Luis Enrique Rivero Carrera, y los demás proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Y anunció un voto particular, ¿cierto?

Magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera: Sí, sí.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Okey, muy bien.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Gracias.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: En consecuencia, en los juicios de la ciudadanía 1379 y 1425, ambos de este año, en cada caso resolvemos:

Primero.- Revocar la sentencia impugnada.

Segundo.- Revocar en el caso del juicio 1379 el acuerdo 102 de este año, y en el caso del juicio 1425, el acuerdo 95, también de este año, ambos emitidos por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de Guerrero, para los efectos que se precisan en la sentencia.

En los juicios de la ciudadanía 1401 y 1405, ambos de este año, resolvemos:

Primero.- Acumular los juicios de referencia, por lo que se debe agregar copia certificada la sentencia al juicio acumulado.

Segundo.- Confirmar en lo que fue materia de impugnación la resolución impugnada.

En los juicios de la ciudadanía 1418 y 1430, ambos de este año, resolvemos:

Primero.- Acumular los juicios de referencia, por lo que debe agregarse copia certificada de la sentencia al juicio acumulado.

Segundo.- Sobreseer el juicio de la ciudadanía 1430 de este año.

Tercero.- Expedir copia certificada de los puntos resolutiveos de la sentencia para que la parte actora pueda votar en las elecciones federal y local del próximo 2 de junio.

Cuarto.- Vincular a quien ocupe la presidencia y la primera secretaria de la mesa directiva de casilla respectiva para que con la copia certificada de la sentencia y una identificación de la parte actora, 1º (primero), le permitan votar agregando su nombre en el cuadernillo de la lista nominal; 2º (segundo), asiente en esa circunstancia la hoja de incidente respectiva y 3º (tercero), retenga la copia certificada de los puntos resolutiveos anexándola a la bolsa en que se guarde la lista nominal.

Berenice García Huante, por favor presenta los proyectos de sentencia que somete a consideración de este pleno el magistrado José Luis Ceballos Daza.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Con su autorización, magistrada presidenta, magistrados.

Doy cuenta con 2 (dos) proyectos de sentencia en los cuales se propone el sobreseimiento de las demandas al considerar que se actualiza alguna causal de improcedencia.

En los juicios de revisión constitucional electoral 63 y 64 ambos de este año, promovidos para controvertir las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero que desechó las demandas vinculadas con los registros de las candidaturas a la presidencia municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, postuladas por la coalición parcial conformada por los partidos políticos PAN, PRI, PRD y por Movimiento Ciudadano en el estado de Guerrero.

En los proyectos de cuenta se estima que los medios son improcedentes ya que han quedado sin materia por un cambio de situación jurídica.

Es la cuenta, magistrada presidenta, magistrados.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias, secretaria.

Magistrados, los proyectos están a su consideración.

Al no haber intervenciones, secretaria, por favor toma la votación.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Sí, magistrada.

Magistrado José Luis Ceballos Daza.

Magistrado José Luis Ceballos Daza: A favor.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Magistrado Luis Enrique Rivero Carrera.

Magistrado en funciones Luis Enrique Rivero Carrera: A favor.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Magistrada María Silva Rojas.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: A favor también. Gracias.

Secretaria general de acuerdos Berenice García Huante: Magistrada presidenta, los proyectos de la cuenta se aprobaron por unanimidad de votos.

Magistrada presidenta María Guadalupe Silva Rojas: Muchas gracias, secretaria.

En consecuencia, en los juicios de revisión constitucional electoral 63 y 64, ambos de este año, en cada caso resolvemos:

Único.- Sobreseer la demanda.

Al no haber más asuntos que tratar, siendo las 17:01 (diecisiete horas con un minuto) se da por concluida la sesión.

Muchas gracias. Buenas tardes.

---o0o---